

SESIONES ORDINARIAS

2002

ORDEN DEL DIA N° 328

COMISION DE LEGISLACION PENAL

Impreso el día 13 de junio de 2002

Término del artículo 113: 25 de junio de 2002

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo sobre las circunstancias vinculadas a interrogatorios policiales efectuados el día 20 de marzo de 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. **Jarque y otros** (949-D.-2002.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha considerado el proyecto de resolución de la señora diputada Jarque y otros señores diputados por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el operativo policial del 20 de marzo de 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 14 de mayo de 2002.

Margarita R. Stolbizer. – Atilio P. Tazzioli. – José A. Mirabile. – Guillermo E. Johnson. – María E. Biglieri. – María L. Chaya. – Marta I. Di Leo. – María del Carmen Falbo. – Alejandro O. Filomeno. – Eduardo D. J. García. – Nilda C. Garré. – Laura C. Musa. – Benjamín R. Nieto Brizuela. – Marta Palou. – Marcelo J. A. Stubrin. – Juan M. Urtubey.

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, informe sobre las circunstancias vinculadas a interrogatorios policiales efectuados el día 20 de marzo de 2002.

a) Bajo qué condiciones y/o circunstancias se detiene a un automovilista en búsqueda de su identificación y/o se procede a requisar el vehículo en el cual circula;

b) Identidad de los agentes pertenecientes a la institución policial que procedieron al pedido de identificación al señor Sergio Tobal en la mañana del día 20 de marzo a las 11 horas, motivo que indujo a los agentes a solicitar la identificación o en su defecto si se originó por una orden emanada de la superioridad, y resultado del proceder policial;

c) Identidad de los agentes que realizaron el pedido de identificación al transeúnte que circulaba por la intersección de las calles Ravignani y Córdoba, pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo día 20 de marzo, y motivo de la solicitud de identificación;

d) Si existió información de carácter confidencial que permita vincular la actividad de los dos ciudadanos que fueron identificados;

e) Si el automóvil Fiat Palio chapa patente DOQ 784 pertenece a la Policía Federal Argentina o es de propiedad de alguno de los agentes que prestan servicio en la institución;

f) Si existe un registro de las personas que habitualmente participan de las asambleas barriales que se llevan a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires;

g) En caso de que el punto anterior fuere afirmativo, cuál es el motivo por el cual se ha llevado a cabo dicha investigación;

h) Cuál es el organismo responsable en la investigación, y cuál es el destino y/o la utilización de la información recopilada.

Margarita O. Jarque. – Marcela A. Bordenave. – Atilio P. Tazzioli.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal al considerar el proyecto de resolución de la señora diputada Jarque y otros señores diputados por el que se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el operativo policial del 20 de marzo de 2002 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cree innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos que lo acompañan por lo que los hace suyos y así lo expresa.

Margarita R. Stolbizer.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

A partir del 19 de diciembre pasado, la sociedad ha encontrado una forma de expresión popular de rechazo a las consecuencias del modelo de gestión político-económico que se ha venido implementando sostenidamente en nuestro país a lo largo de estos años de democracia.

Pero en todo caso, si la característica de estas primeras expresiones de rechazo fue la extraordinaria confluencia espontánea y masiva de cientos de miles de ciudadanos en múltiples puntos a lo largo y a lo ancho del país, hoy, a pocos meses, la espontaneidad de nuestro pueblo, reaccionando frente a tanta injusticia social, ha dado paso a la organización y la articulación a través de las asambleas barriales.

Este fenómeno social que sacude la trama vecinal en todas sus versiones socioeconómicas ha comenzado a desarrollar un protagonismo preñado de críticas, de propuestas y de exigencias a los representantes de gobierno, cuestiones todas muy propias de toda sociedad democrática que se precie de tal. Por supuesto que no nos sorprende que esto provoque preocupación en ciertos grupos de interés.

Sin embargo, sí es preocupante que se haya comenzado a producir distinto tipo de acciones violentas contra reuniones vecinales y ciudadanos participantes por parte de grupos de matones que responden a dirigentes políticos y, todavía más inaceptable, de personal policial, dirigidas a desalentar y a amedrentar a la población respecto a su más legítimo derecho a expresarse, reunirse y manifestarse.

Los ataques y persecuciones van en aumento y se están produciendo en distintos puntos geográficos. En el conurbano, por sólo citar algunos ejemplos, la persecución tomó forma de agresión física, sangrienta, en el primer cacerolazo en Merlo; en Padua 3 matones irrumpieron en medio de una reunión de vecinos de Padua plantándose con una cámara y filmaron

todo; a una de las organizadoras de la asamblea de Merlo le quemaron parte de su casa y 5 de sus compañeros fueron interceptados por policías que les mostraron fotos suyas bajo la amenaza de “acusarlos de agitadores”; en San Isidro una patota persiguió y molió a golpes a caceroleros que habían ido a apoyar una protesta de médicos del hospital de San Isidro, dentro de los tribunales donde iban a denunciarla y frente a la misma policía.

Ante esta metodología palmariamente ilegal y antidemocrática, que opera con bandas organizadas para irrumpir durante o al final de las protestas con palos y cadenas para agredir a los manifestantes —grandes, chicos y abuelos— con golpes, piedras e insultos, la policía plantea sistemáticamente que no puede hacer nada. Algunos autoconvocados reciben amenazas telefónicas o son increpados en medio de la calle por desconocidos o por patrulleros que aparecen merodeando las asambleas y realizando controles e interrogatorios.

Respecto a este último punto, la nota publicada el 21 de marzo de 2002 por el diario “Página/12” plantea circunstancias en torno a procedimientos policiales que requieren, en principio, de una adecuada verificación. Su texto dice: “Sergio Tobal, martillero y uno de los fundadores de la asamblea de Palermo Viejo, denunció que ayer mismo fue extrañamente detenido en la calle, a las once de la mañana, por cuatro policías de civil. ‘Me pararon en Córdoba y Humboldt, me dijeron que necesitaban que me identificara y me revisaron el auto entero. Venían en un Fiat Palio de color borra vino con chapa DOQ 784’, precisó. A Juan, de la misma asamblea, le pasó, también ayer, algo similar. ‘Iba caminando lo más tranquilo, repartiendo volantes para convocar a la marcha de antorchas cuando aparecieron dos policías que me pararon en Ravignani y Córdoba. Venían en un auto también borra vino. Me pidieron documentos y dijeron que buscaban un auto robado. Lo extraño es que yo estaba a pie’, contó a este diario. El martes, los asambleístas de Corrientes y Juan B. Justo fueron agredidos con un disparo que rozó sus cabezas y pegó en uno de sus afiches”.

La sociedad argentina está acorralada por las consecuencias de la violencia del hambre, de la exclusión, de la falta de trabajo, de la falta de justicia.

No podemos permitir que también la ciudadanía quede acorralada por la política del matonaje y por unas fuerzas de seguridad del Estado que pudieran estar actuando y respondiendo a fundamentos contrarios al estado de derecho.

Por lo antedicho, solicito la urgente aprobación del presente proyecto.

Margarita O. Jarque. – Marcela A. Bordenave. – Atilio P. Tazzioli.